

INE/CG149/2022

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, PRECANDIDATO A GOBERNADOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022 EN LA REFERIDA ENTIDAD, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP

Ciudad de México, 18 de marzo de dos mil veintidós.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós se recibió vía electrónica en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja de fecha veinticinco de febrero, recepcionado en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tamaulipas, suscrito por la C. María Luisa García Medina, por propio derecho, en contra del C. Cesar Augusto Verastegui Ostos, alias “El Truko” y/o “El Truco”, aspirante, precandidato y/o candidato al cargo de Gobernador del Estado de Tamaulipas, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el Estado de Tamaulipas. (Fojas 0001 a 0057 del expediente digital).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios aportados por la quejosa en su escrito de queja:

“(…)

HECHOS

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**

1. El día 12 de septiembre de 2021, inició el proceso electoral local en el Estado de Tamaulipas para renovar la Gubernatura en el Estado, es menester señalar que al día de hoy nos encontramos, dentro del periodo de intercampaign.

2. Que el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS ALIAS EL “TRUKO y/o “TRUCO”, y la asociación durante el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2021, llevo a acabo (sic) eventos junto con la ASOCIACIÓN Y/O AGRUPACION TODOS POR TAMAULIPAS, en donde de manera velada promocionó se (sic) imagen en diversos eventos. De igual manera en los tiempos que se señalan, el denunciado fungía como servidor público y tenía el cargo de Secretario de Gobierno del Estado de Tamaulipas.

A continuación se da cuenta con las actividades y mensajes que el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS ALIAS EL “TRUKO y/o “TRUCO”, en su cuenta <https://www.facebook.com/cesartrukoverastequi/> :

10 diciembre 2021

<https://www.facebook.com/cesartrukoverastequi/photos/a.114890384340900/122593986903873/?type=3&source=48>



5 de diciembre 2021

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=120969310399674&id=107525695077369&__entstream_source=timeline



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**

4 de diciembre 2021

https://www.facebook.com/story.php2story_fbid=120631720433433&id=107525695077369&m_entstream_source=timeline



29 de noviembre de 2021

https://www.facebook.com/story.php7story_fbid=118904483939490&id=107525695077369&m_entstream_source=timeline



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**

28 de noviembre 2021

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=118638537299418&id=107525695077369&m_entstream_source=timeline



28 de noviembre 2021

<https://www.facebook.com/watch/?v=269999935093538>



27 de noviembre 2021

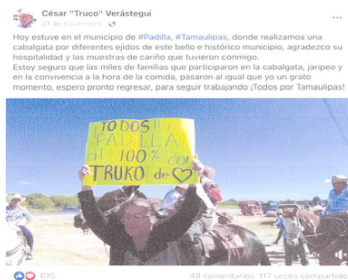
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=118304327332839&id=107525695077369&m_entstream_source=timeline



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**

21 de noviembre de 2021

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=116144017548870&id=107525695077369&m_entstream_source=timeline



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=116129814216957&id=107525695077369&m_entstream_source=timeline



17 de noviembre 2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=114625304367408&id=107525695077369&m_entstream_source=timeline



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**

A continuación se da cuenta con las actividades y mensajes que la ASOCIACIÓN Y/O AGRUPACIÓN TODOS POR TAMAULIPAS da cuenta de las actividades realizadas:

<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas>



<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas/videos/716316923094258/>



<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas/posts/11719384411620>



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**

<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas/videos/419572729801067>



<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas/videos/438622381246601>

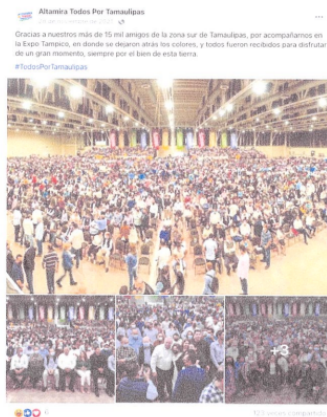


<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas/videos/716316923094258>



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**

<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas/posts/117608104070194>



<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas/videos/683029782678259>



<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas/posts/119937487170589>



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**

<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas/videos/303885121620959>



<https://www.facebook.com/AltamiraTodosxTamaulipas/posts/122572350240436>



De los eventos masivos realizados, para promover la imagen el denunciado dieron cuenta diversos diarios y medios de comunicación:

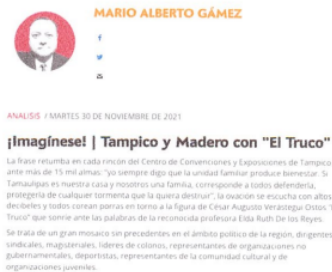
<https://www.eluniversal.com.mx/estados/continuan-los-eventos-masivos-de-el-truco-en-tamaulipas-morenistas-realizan-conclave>



<https://expreso.press/2021/11/29/el-truco-en-tampico/>



<https://www.elsoldetampico.com.mx/analisis/imaginese-tampico-y-madero-con-el-truco-7544024.html>



<https://www.elmanana.com/opinion/columnas/el-truco-navega-en-busca-de-votos-5459743.html>



<https://ne-np.facebook.com/RevistaVertical.Matamoros/videos/entre-los-acarreados-de-ayer-al-evento-del-truco-en-tampico-la-mayor%C3%ADa-era-gente/430985611736553/>



Por lo que solicito se certifiquen cada una de las publicaciones y videos de esas redes sociales donde se promueve y se da cuenta de los eventos que dan como resultado actos anticipados de campaña a favor del C. César Augusto Verástegui.

Como esa autoridad observa el común denominador en todas las publicaciones, son eventos masivos donde la figura central es César Augusto Verástegui, también conocido como el “Truko” y/o “TRUCO”, en todas las publicaciones se hace alusión al funcionario a fin de posicionarlo y sin tener un sustento de carácter institucional, y sin especificar qué clase de actividad realiza y cuál es el fundamento, las mismas se realizan iniciado el proceso electoral.

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.-Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

3.- Que es un hecho notorio que la Asociación y/o Agrupación Todos por Tamaulipas opera y tienen un carácter público y comercial, fue la principal promotora de los eventos denunciados, con el fin de hacer propaganda electoral

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**

a favor y con la intención de posicionar ilegalmente la imagen del C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI y que le genera un beneficio al ya precandidato incoado, vulnerando el bien jurídico tutelado de equidad en la contienda electoral.

Por lo que es posible afirmar que la participación de la Asociación y/o Agrupación Todos por Tamaulipas se hace como parte de una estrategia de propaganda electoral y con una intención deliberada, con la finalidad de impactar a su favor en el electorado, existiendo un beneficio a la campaña del candidato, utilizando recursos de carácter dudoso o bien de recursos públicos del Estado los cuales se estarían desviando del Gobierno de Tamaulipas a fin de realizar campaña electoral ilícita, considerada como actos anticipados de pre y de campaña, a favor del C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI.

En ese sentido se solicita que:

a.- Se investigue el monto y origen de los recursos utilizados para la realización de los eventos que se denuncian y que han sido utilizados para realizar actos anticipados de pre y de campaña a favor del C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI.

b.- Se investigue a LA ASOCIACIÓN Y/O AGRUPACION TODOS POR TAMAULIPAS y a su Promotor RICARDO GAVIÑO CARDENAS.

c.- Se contabilice los montos económicos utilizados en la realización de los eventos denunciados como gastos de pre o de campaña de CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI. En ese sentido el cálculo del monto deberá ser sumado a los gastos de campaña de CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, con relación a las ilegales aportaciones realizadas por LA ASOCIACIÓN Y/O AGRUPACION TODOS POR TAMAULIPAS y a su Promotor RICARDO GAVIÑO CARDENAS, en especie, así como contribuciones y en dinero.

En ese sentido, la omisión de esa autoridad de analizar lo solicitado violentaría el sistema de financiamiento en materia electoral, sobre todo aquel que tiene relación con las actividades de campaña, y el cual no podría ser funcional, si no cuenta con un mecanismo de revisión que asegure, entre otras, cosas que el financiamiento público prevalezca sobre el privado, que se respeten los topes de gastos de campaña, que no se reciban recursos de entes prohibidos, y que se utilicen para violentar la ley.

Como se aprecia de todos los elementos de convicción se desprende:

1.- El denunciado al momento de los hechos era un servidor público con el cargo de Secretario de Gobierno del Estado de Tamaulipas.

2.- Desde el día 12 de septiembre nos encontramos en un proceso electoral para renovar el cargo de ejecutivo del Estado de Tamaulipas.

3.- Los funcionarios públicos en su actuar, y en los procesos electorales, deben de regirse bajo una directriz de medida en razón de su cargo y del alcance que puede tener su presencia, declaraciones y publicaciones, tal como lo ha señalado la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4.- Que las publicaciones denunciadas se realizan en cuentas personales de los denunciados, en las redes sociales de Facebook y las mismas se realizaron bajo una campaña encubierta y sistemática para posicionar su imagen.

5.- Que de manera sistemática se realizaron eventos masivos para promover la candidatura de C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, en coordinación con TODOS POR TAMAULIPAS.

6.- Que la asociación TODOS POR TAMAULIPAS, abanderó políticamente a C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, como su candidato para competir en las próximas elecciones y lo trató de posicionar mediante eventos masivos y públicos, así como con publicaciones en redes sociales.

7.- Que esa autoridad debe indagar el origen de los recursos que se utilizaron para llevar a cabo los eventos masivos donde el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, en coordinación con TODOS POR TAMAULIPAS, han presumido en redes donde convocaron a miles de Tamaulipecos en cada evento que realizaron, en locales de gran capacidad.

8.- Las publicaciones se han hecho en una cantidad considerable, se replican en dos redes de acceso público, con el mismo formato, donde predomina la imagen y el nombre del (sic) CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, y las cuales se realizan de manera periódica y de manera intencional iniciado el proceso electoral.

9.- En las publicaciones se aprecia de manera preponderante la imagen de CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, tratando de exaltar en primer plano y de forma destacada su imagen y nombre.

10.- Que dichos eventos no fueron reportados, y mucho menos fiscalizados por esa autoridad. Por lo que debe de sancionarse a los denunciados y considerar los montos utilizados en la organización de esos eventos en los gastos de campaña y precampaña.

11.- De las publicaciones y videos publicados por los denunciados, hay elementos descriptivos que intentan dar a conocer la imagen del denunciado, a partir de diversas acciones positivas que ha desarrollado, con lo cual se advierte que se intenta veladamente de enaltecer a su persona, además de promoverlo y posicionarlo ya como candidato.

12.- Los mensajes llegan a un considerable número de personas de manera directa e incuantificable de manera indirecta.

13.- Debe de analizar los equivalentes funcionales, en razón que el estudio de las publicaciones y propaganda no puede ser una tarea mecánica ni aislada, que solo revise formalmente el uso de ciertas palabras o signos, como lo hace la autoridad y se debe incluir el análisis del contexto integral de la propaganda para determinar si las expresiones denunciadas constituyen o contienen algún equivalente funcional.

14.- No se han transparentado el origen de los recursos utilizados en los eventos denunciados.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar los alcances de participación de los servidores públicos y en ese sentido se ha pronunciado y ha sostenido en primer término, que la investidura de un funcionario existía durante todo el periodo de su ejercicio, con independencia de que el día fuera hábil o no y, por ello, tal investidura era susceptible de afectar al electorado que participa en actos en donde intervenga dicho funcionario, y cuya conducta es violatoria de la ley electoral. Así, se estima que la participación, en su momento del Secretario de Gobierno del Estado de Tamaulipas CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, en eventos promovidos para posicionar su imagen en diversos lugares del Estado de Tamaulipas y que fueron promovidos por la AGRUPACION ELECTORAL TODOS POR TAMAULIPAS, aterrizan en una violación flagrante a la constitución y ley electoral, dado que no implica que su asistencia, ya sea en día hábil o inhábil, lo despoja de su investidura, ya que se conserva, en condiciones ordinarias, durante todo el periodo de su ejercicio.

Es en ese sentido que el hecho de que CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, debido a las potestades administrativas inherentes a su cargo, le confiere una connotación propia, y cuya presencia impacta y vulnera las condiciones democráticas de equidad de los comicios.

De igual manera no pasa desapercibido, que para evitar acciones y conductas realizadas por CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI ha sido criterio de las autoridades electorales que:

La imparcialidad gubernamental, constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para que los procesos electorales se lleven a cabo con integridad. Es, además, un factor de legitimidad y confianza institucional, en la medida que la actividad gubernamental, su propaganda y el desempeño del funcionariado público no incidan negativamente en las condiciones de la contienda, pues de ello depende, en último análisis, la legitimidad del sistema político en su conjunto.

...

Con lo anterior "... Se persigue como fin el voto libre y auténtico de la ciudadanía, restringiendo el ámbito de actuación del servicio público a efecto de que el poder público no pueda emplearse para influir en el ánimo de la ciudadanía, siguiendo el modelo de otros países, en los cuales, se prohíbe que las autoridades públicas se identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos políticos en elecciones, y también que se apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas sociales para su beneficio electoral"

Es en ese sentido que cualquier servidor público debe de abstenerse de emitir a través de cualquier acto, discurso o medio, publicidad o expresiones de promoción o propaganda a favor de sí mismo o de terceros, coalición o de sus aspirantes y candidatos a cargos de elección popular en cualquier proceso electoral, incluyendo la utilización de símbolos y mensajes distintivos que vinculen a un partido político, coalición o candidato. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del siguiente criterio:

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA).—Los artículos 39, 41 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, entre otras cuestiones, los principios que rigen las elecciones de los poderes públicos, como son: el voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones por un organismo público autónomo; la certeza, imparcialidad, legalidad, independencia y objetividad; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social; el financiamiento de las campañas electorales y el control de la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones electorales. El principio de legalidad, de observancia estricta en materia electoral, tiene como uno de los principales destinatarios del estado constitucional de Derecho, al propio Estado, sus

órganos, representantes y gobernantes, obligándoles a sujetar su actuación, en todo momento, al principio de juridicidad. De igual forma, los principios constitucionales aludidos tutelan los valores fundamentales de elecciones libres y auténticas que implican la vigencia efectiva de las libertades públicas, lo que se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión; el poder público no debe emplearse para influir al elector, tal y como lo han determinado otros tribunales constitucionales, como la Corte Constitucional alemana en el caso identificado como 2 BvE 1/76, al sostener que no se permite que las autoridades públicas se identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas sociales, en especial, propaganda; de igual forma se protege la imparcialidad, la igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad, en busca de inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato o que distorsione las condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social, alterando la igualdad de oportunidades entre los contendientes. En concordancia con lo anterior, el artículo 59, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Colima, establece como causa de nulidad de una elección, la intervención del Gobernador, por sí o por medio de otras autoridades en los comicios, cuando ello sea determinante para el resultado de la elección. Lo que implica la prohibición al jefe del ejecutivo local de intervenir en las elecciones de manera directa o por medio de otras autoridades o agentes. Así, la actuación del ejecutivo local en los procesos electorales está delimitada por el orden jurídico y siempre es de carácter auxiliar y complementario, en apoyo a las autoridades electorales, siendo que cualquier actuación que vaya más allá de los mencionados límites, implicaría la conculcación del principio de neutralidad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige a todos los servidores públicos para que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad aplicable.

Es en ese sentido que esa autoridad tiene la obligación de:

- Evitar la difusión de propaganda que se realice o divulgue en cualquier medio, que implique promoción o posicionamiento de una persona para la obtención de una candidatura de manera anticipada a los tiempos establecidos y, en su caso, el voto en los Procesos Electorales Locales y federales.*
- Establecerlos mecanismos para prevenir, investigar y, en su caso, corregir aquellas conductas que vulneren los principios y fines que rigen a las contiendas electorales.*
- Salvaguardarla (sic) equidad en la contienda para quienes participan en un Proceso Electoral impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el electorado, ya sea por sí o por interpósita persona, sea ésta pública o privada.*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP

- *Aplicarse a cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular, pues no se restringe a un determinado grupo de sujetos sino a todos aquellos actores que busquen verse favorecidos con el voto o apoyo de la ciudadana para alcanzar una precandidatura y a la postre un cargo de elección popular.*

- *Circunscribir la difusión de cualquier propaganda, mensaje o expresión de promoción realizada en cualquier medio de difusión, fuera de los plazos electorales previamente establecidos, a las reglas establecidas en el marco normativo legal citado a lo largo del presente Acuerdo.*

- *Establecer los medios de control para prevenir e inhibir la difusión anticipada de aspiraciones políticas con miras a acceder a un cargo de elección popular en detrimento de la equidad en la contienda.*

En el mismo sentido mediante sendos criterios, la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró que no se desconocía la imagen positiva que la ciudadanía posee de los servidores públicos de elección popular, así como de la actuación de los gobiernos identificados con una fuerza política, al ser parte de un acervo susceptible de ser capitalizado, empero resultaba inadmisibles la presencia de éstos en un acto proselitista, porque ello no contribuía a la preservación de los principios de imparcialidad y de la debida utilización de recursos públicos.

Es en ese sentido que las restricciones establecidas por la ley y por los criterios del máximo órgano constitucional electoral están dirigidas a los funcionarios públicos que ostentan los principales cargos de gobierno en los ámbitos federal, estatal y municipal y se refieren a todo tipo de conducta tendente a la promoción o coacción así como a la utilización de recursos públicos, para beneficiarse, como es el caso que nos ocupa.

Las conductas denunciadas, son contrarias a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de lo señalado por los diversos 161 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

Del análisis de las publicaciones, se actualiza la conducta ilegal relativa a promoción personalizada del C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, que al momento de los hechos fungía como Secretario de Gobierno del Estado, prohibición señalada en el artículo 134, octavo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A mayor claridad, las normas constitucionales, legales y reglamentarias que se están violentando y objeto de la presente queja son las siguientes:

Artículo 134, párrafo octavo

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En relación con el diverso 161 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que atiende lo señalado en la Carta Magna en los mismos términos y se transcribe para mejor apreciación:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente del Estado o los municipios, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Además de violentar el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su (sic) incisos d) y e) que a la letra señalan

Artículo 449.

Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

...

*d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas **durante los procesos electorales**;*

e) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución;

Además del artículo 9 de la Ley General de Comunicación Social que señala:

Artículo 9.- Además de lo previsto en el artículo 21 de esta Ley, no se podrán difundir Campañas de Comunicación Social, cuyos contenidos:

I. Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14;

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el artículo 134 tiene como finalidad que:

- La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, **debe ser institucional y NO personal;**
- Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;
- **La propaganda difundida por las personas del servicio público, no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de cualquier persona servidora pública;**
- Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión;
- Prevé que toda persona servidora pública tiene el deber de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos;
- Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier modalidad de comunicación social", **la prohibición se materializa a través de todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, propaganda proveniente de funcionarios públicos, tales como: televisión, radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre otros.**

La promoción personalizada realizada en forma de propaganda anticipada al inicio de un proceso electoral que realizó el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, se actualiza a partir de que las publicaciones que se divulgan en redes sociales de acceso público y abierto, y es evidente, que se hace un culto a la personalidad del funcionario, sin que ello signifique un auténtico ejercicio de obligaciones o facultades, de transparencia o de deber de informar a la sociedad, con la evidente intención de posicionarlo ilegalmente y en forma

inequitativa frente a militantes de su partido y frente a la sociedad tamaulipeca ante la próxima jornada electoral.

*La promoción personalizada, y la promoción de eventos son dos supuestos jurídicos que se actualizan con las publicaciones pautadas por el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI y que están ocasionando un daño irreparable a los principios de imparcialidad y equidad en el proceso electoral, **por lo que solicitamos que esta autoridad dicte las medidas necesarias para hacer cesar los daños que se están ocasionando y en su oportunidad, actualice lo dispuesto por el artículo 456, inciso c), fracción III, de la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales, y restablezca el estado de derecho y la regularidad normativa en materia electoral que debe prevalecer en el Proceso que se desarrolla en Tamaulipas.***

En abundancia de argumentos, cito a continuación la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la promoción personalizada de servidores públicos:

*Partido de la Revolución Democrática
VS*

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Jurisprudencia 12/2015

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizarla infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas;

sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo.

*Es menester señalar que, el ejercicio de la libertad de expresión dentro de un periodo electoral debe ser amplio para el fortalecimiento de la democracia al obtener como se ha sostenido más y mejores medios para el intercambio de opiniones sobre las distintas opciones de elección. **Sin embargo, cabe precisar que este derecho no es absoluto, y en las conductas denunciadas se aprecia la emisión de publicaciones a título personal y que mediante un verdadero análisis implican una inhibición de estas conductas, dado que estas provienen de un sujeto que es funcionario, que esta inmiscuido de manera concreta en un proceso electoral con aspiraciones sólidas, tiene acceso a recursos públicos.** Dicha (sic) retraimiento es con la intención de garantizar la vigencia de la imparcialidad y la equidad en la contienda, evitando que un servidor público abuse de su posición para lograr objetivos concretos de cara al proceso electoral, y en consecuencia dicha acción de autoridad, **como tal no está contemplado en un proceso de censura a la manifestación de las ideas.***

Ahora bien en el contexto de las redes sociales la propia Sala superior (sic) del Tribunal se ha manifestado por garantizar el derecho a la libre expresión, desde un aspecto ciudadano y de interacción de intercambio de opiniones. Pero también se ha manifestado en el sentido que dicha libertad de expresión no es absoluta y esta se debe regir bajo un marco legal.

En ese tenor el derecho a la libre expresión, al igual que opera con el resto de derechos fundamentales, no implica que la libertad de expresión sea absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de su interacción con otros elementos del sistema jurídico.

Es así que el numeral 134 de la Constitución establece que los servidores públicos deben:

- 1) Aplicar de manera eficiente los recursos públicos garantizando la imparcialidad, y***
- 2) Evitar la promoción personalizada en la propaganda gubernamental. Eso quiere decir que de forma libre no pueden hacer expresiones a nombre propio que relacione recursos públicos y sobre todo que sean***

tendientes a posicionarse con fines políticos o ajenos a la función y atribuciones desempeñadas, para así, asegurar la competencia igualitaria.

SEGUNDO.- Los citados eventos y las citadas publicaciones vulneran lo señalado, por el artículo 116, fracción IV, inciso (j) (sic), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la ley respectiva garantizara las reglas los requisitos y formas para los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular:

Artículo 116.-

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

Lo anterior es así, en razón de que el proceso electoral Local en Tamaulipas, inició el 12 de septiembre de 2021 y la precampañas electorales corrieron del día 2 de enero al 10 de febrero de 2022 y las campañas serán del 3 de abril al 1 de junio de 2022 y no obstante lo anterior el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, a sabiendas que tenía la prohibición participo en eventos y promocionado su imagen, de manera sistemática y anticipada pretendiendo influir en las preferencias electorales de los ciudadanos asistiendo a eventos donde se enaltece su persona y se da por un hecho que él era el candidato para ser gobernador, acciones que publicó en periodo previo a las precampañas y que se mantienen en las intercampana en sus redes sociales donde promociona y sobresale su imagen que sirve como propaganda política de manera encubierta utilizando su investidura de manera ilegal.

Dichas a conductas aterrizan en lo señalado en el siguiente criterio:

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.-De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 211, 212, párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a), 354, párrafo 1, inciso a), 367, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP

Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se advierte que la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción política obtenga ventaja en relación con otra. Por ello, tomando en consideración que esos actos pueden realizarse antes de las etapas de precampaña o campaña, incluso antes del inicio del Proceso Electoral, debe estimarse que su denuncia puede presentarse ante el Instituto Federal Electoral, en cualquier tiempo.

Elemento personal: *Se refiere a que los actos de precampaña o campaña política son susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral competente o antes del inicio formal de las campañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está latente.*

Se cumple al ser el denunciado el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, el que asistió a los eventos y es el centro de atención, de pancartas, de porras, ya como “candidato” y de quien se promovió y se enalteció su persona. Además de ser el quien hace las publicaciones de sus eventos, así como en las que publicita TODOS POR TAMAULIPAS

Elemento Subjetivo: *Se refiere a la finalidad para la realización de actos anticipados de precampaña o campaña política, es decir, la materialización de este tipo de acciones tiene como propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. En el mismo sentido en los videos y audios se ve y se escucha y se ve que los eventos están dirigidos para promocionar la imagen del C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, mediante porras, alusiones personales, pancartas que dan como ganador de la elección al funcionario denunciado, enaltecimiento de la figura del funcionario denunciado.*

Se cumple y se desprenden de los eventos donde se arenga, que el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI el candidato que por sus cualidades es el idóneo de dirigir Tamaulipas. Aunado a las publicaciones señaladas como violatorias de la legislación electoral, esto es así en razón de que como se señaló en líneas arriba, dichas publicaciones no buscan tener un carácter institucional o informativo, están fuera de tiempo, se hacen en un contexto de prohibición de su realización y difusión, y de la lectura de las publicaciones y de los videos se desprende obtener un posicionamiento individual para acceder a un cargo de elección popular, dado que la emisión del mensaje está enfocado más en

transmitir logros personales, enaltecer a un individuo y la figura del funcionario bajo un verdadero análisis de equivalentes funcionales.

Elemento temporal.- *Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la característica primordial para la configuración de una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el procedimiento partidista de selección respectivo y de manera previo al registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido político pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas.*

Queda debidamente acreditado debido a que, como ya se mencionó con antelación, el proceso inició el 12 de septiembre de 2021, las precampañas electorales se llevaron a cabo del día 2 de enero al 10 de febrero de 2022 y las campañas se celebrarán del 3 de abril al 1 de junio de 2022 y no obstante lo anterior el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI inicio su estrategia de campaña en 2021.

Ahora bien, al regular los actos anticipados de campaña, el legislador consideró necesario garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo que implica evitar que una opción política se encuentre en una situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente la campaña respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la Plataforma Electoral de un determinado partido político o del aspirante o precandidato correspondiente.

Conforme al artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los actos anticipados de campaña se refieren a las expresiones que se realicen, bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas que contengan: llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido y presiones en las que alguna candidatura o partido solicite cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.

También los actos anticipados de precampaña se definen como las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va del inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas y que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.

En el caso que nos ocupa, se acreditan las conductas denunciadas, al tratarse de un engaño a la sociedad, en virtud de que se violentó de manera sistemática diversas normas electorales, y en donde se aprecia toda una campaña y propaganda anticipada a nombre y a favor del C. CÉSAR AUGUSTO

VERÁSTEGUI, en razón que los eventos realizados estuvieron dirigidos a la ciudadanía en general.

Dichos eventos vulneran lo señalado, por el artículo 116, fracción IV, inciso j, que establece los plazos para la realización de campañas electorales, asimismo, señala que la ley respectiva garantizaran (sic) las reglas los requisitos y formas para los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular:

Artículo 116.-

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

Lo anterior es así, en razón de que en ese tiempo nos encontrábamos fuera de precampaña y campaña, pero ya había iniciado el proceso electoral y en ese momento no estaban definido el candidato para contender por la candidatura por la Gubernatura del estado de Tamaulipas.

Con los eventos denunciados se busca incidir en las preferencias de los tamaulipeco y tamaulipecas, en razón que de las pruebas aportadas se puede apreciar que los eventos estuvieron dirigidos a la población en general.

Es entonces que con la propaganda que se promovió, y bajo discursos dirigidos a la población de Tamaulipas en general, de manera anticipada el denunciado y la asociación Todos Por Tamaulipas pretenden influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.

Por todo lo anterior, queda debidamente sustentado que el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, bajo el auspicio de Todos por Tamaulipas, ha incurrido de manera intencional en actos anticipados, configurándose lo señalado en el artículo 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su parte conducente señala:

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;...”

Lo anterior es así en razón que la Propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los supuestos de cada caso, se transcribe para mejor apreciación:

a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;

b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;

Por todo lo anterior es menester que esa autoridad tome las providencias necesarias para sancionar y contabilizar dicho evento en los gastos erogados y para los efectos legales procedentes del denunciado el C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI.

TERCERO.- FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. *Una disposición sustancial para hacer efectivo el principio de equidad en el financiamiento de los partidos políticos es el contenido en el artículo 54, párrafo 1, de la ley General de Partidos Políticos en el que se establece la prohibición para diversos entes de realizar aportaciones en dinero o en especie, por sí, o por interpósita persona.*

Como se señaló, la ASOCIACIÓN Y/O AGRUPACIÓN TODOS POR TAMAULIPAS y su promotor RICARDO GAVIÑO CARDENAS organizaron los eventos denunciados, con lo cual se ha violentado de manera flagrante la ley, promoviendo actos anticipados de pre y de campaña a favor del C. César Augusto Verástegui, mediante un esquema de financiamiento en especie, económico y de carácter ilícito, con el fin de posicionar al C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI del cual no se ha dado cuenta y mucho menos se ha

transparentado y que de manera notoria se ha violentado la ley de manera sistemática.

Conviene destacar la exposición de motivos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, en lo que interesa, señaló lo siguiente:

[...] Mención particular merecen la regulación que se propone en las materias siguientes:

- 1. Fiscalización efectiva y oportuna de los recursos que utilicen las asociaciones políticas y candidaturas. Se revoluciona el modelo de fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas, pasando de la simple revisión de informes presentados por los sujetos obligados, a un esquema de seguimiento de realización de gastos y registro en línea, con padrón de proveedores y mecanismos de vigilancia y monitoreo, de tal suerte que la presentación de informes marquen la conclusión del proceso de fiscalización y no su inicio, tan solo a la espera de su dictaminación final, que en el caso de las informes de gastos de campaña sea, de ser el caso, parte de los elementos de la declaración de validez de las elecciones. Estableciendo para los mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia y verificación de las mismas, el principio de máxima publicidad con el objetivo de evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y el respeto a los topes de gastos de campaña.*

Así, la fiscalización, establecida en las normas constitucionales y legales en materia electoral, se advierte el establecimiento de una revisión de naturaleza preventiva más que persecutoria, en la que se procuran como principales objetivos, los siguientes:

- La eficiencia en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos vista desde la óptica de los informes de ingresos y gastos que presentan, dada su relación con la equidad en los procedimientos electorales y su vinculación con la validez de las elecciones.*
- Integrar un esquema de fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información pública que permita conocer no solo a los propios militantes, sino a los ciudadanos en general en qué se gastan los recursos públicos asignados a los partidos.*
- Evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y el respeto a los topes de gastos de campaña.*

En ese tenor el Reglamento de Fiscalización dispone que los ingresos en especie se acumularan a los gastos de los informes respectivos y se computará para el tope de gastos correspondiente. Destacadamente dispone que:

Artículo 106. Ingresos en especie

1. *Tanto los ingresos en especie de cualquier naturaleza como los ingresos en efectivo, se entenderán como ingresos que computarán al financiamiento privado al que tienen derecho a recibir los partidos políticos en términos del artículo 56, numeral 2 de la Ley de Partidos.*
2. *Si una aportación en especie representa un beneficio a una precampaña o campaña, se acumulará a los gastos en los informes respectivos y computará para el tope de gastos correspondiente.*

Artículo 107. Control de los ingresos en especie

1. *Las aportaciones que reciban en especie los sujetos obligados deberán documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado o estimado del mismo bien o servicio, la fecha y lugar de entrega, y el carácter con el que se realiza la aportación respectiva según su naturaleza y con independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras legislaciones.*
2. *En caso de que el valor de registro de las aportaciones en especie declarado por el sujeto obligado, no corresponda al valor nominal o bien no se haya aplicado lo establecido en el numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Comisión a través de la Unidad Técnica, podrá ordenar que sea determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del presente Reglamento.*
3. *Por cada ingreso en especie recibido, se deberán expedir recibos específicos, cumpliendo con los requisitos y los formatos señalados en el Reglamento,*

En el mismo sentido establece la obligación de las organizaciones deberán de cumplir con la presentación de informes, omisión en la que ha incurrido LA ASOCIACIÓN Y/O AGRUPACIÓN TODOS POR TAMAULIPAS y su promotor RICARDO GAVIÑO CARDENAS, en atención a lo que establece el Reglamento de Fiscalización:

Artículo 272. Obligación de presentar

1. *Las organizaciones de ciudadanos presentarán sus informes en términos de lo dispuesto en los artículos 11, numeral 2 de la Ley de*

Partidos, así como en los artículos 236, numeral 1, inciso b) y 272 del Reglamento.

2. Deberán presentar los avisos descritos en el numeral 1, del artículo 284 del Reglamento.

Artículo 273. Plazos de presentación

1. Las organizaciones de ciudadanos deberán presentar informes mensuales sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros diez días de mes siguiente al que se reporta, a partir del momento del aviso al que se refiere el artículo 11, numeral 1 de la Ley de Partidos, hasta el mes en que se resuelva sobre la procedencia de registro.

A (sic) sido criterio de la Sala Superior, que la autoridad fiscalizadora tiene competencia para investigar el posible actuar irregular de un candidato, partido político o coalición y tercero derivado del supuesto beneficio que le representa el acompañamiento o publicaciones de organizaciones ciudadanas. Es en ese sentido que las aportaciones son una serie de eventos, las cuales fueron realizadas por LA ASOCIACIÓN Y (sic) Y/O AGRUPACIÓN TODOS POR TAMAULIPAS y su promotor RICARDO GAVIÑO, en coordinación con C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, y es el caso que la Unidad Técnica de Fiscalización, es competente para conocer del presente tema, ya que estas actividades constituyen un beneficio que debe ser considerado como una aportación en especie a la campaña de un candidato determinado.

El artículo 193 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral establece que:

Artículo 193.

Concepto de precampaña y tipos de gastos

1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.

2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria

respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido.

Artículo 195.

De los conceptos integrantes del gasto de precampaña

1. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 75, numeral 1 de la Ley de Partidos, se estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos del partido político y cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de candidatos y se deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el presente Reglamento, respecto de los (sic) de gastos de campaña.

En ese sentido los denunciados estaban y están obligados a presentar un informe y la documentación necesaria para acreditar los gastos por concepto del proceso interno de selección, por lo que dicha omisión en la que han recaído los incoados, debe de ser investigada y sancionada.

Artículo 239.

Formato en el que se reportan

1. Los informes de precampaña federal o local, deberán generarse y presentarse a través del Sistema de Contabilidad en Línea.

2. Deberán incluir la totalidad de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los precandidatos, desde que éstos son registrados como tales hasta la postulación del candidato ganador correspondiente y en los casos de candidato único, desde el reconocimiento del partido hasta la postulación.

3. Los partidos políticos deberán presentar los informes de precampaña federal o local, conforme las reglas dispuestas en el artículo 79, numeral 1, inciso a) de la Ley de Partidos y 246 del Reglamento.

4. El procedimiento para la revisión de los informes se sujetará a las normas y requisitos dispuestos en el artículo 80, numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos y 287 del Reglamento.

Artículo 240.

Contenido de los informes

1. El informe de precampaña contendrá la totalidad de las operaciones registradas en el Sistema de Contabilidad en Línea, correspondientes al periodo a reportar, incluyendo la totalidad de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los precandidatos, desde que éstos son registrados como tales hasta la postulación del candidato ganador correspondiente y en los casos de candidato único, desde el reconocimiento del partido hasta la postulación.

Dichos informes de precampaña deben presentarse a través del Sistema de Contabilidad en Línea.

Artículo 241.

Documentación anexa al informe

1. Junto con los informes de precampaña deberán adjuntarse a través del Sistema de Contabilidad en Línea:

a) Derogado.

b) El formato de origen de los recursos aplicados a precampaña que contenga los nombres de los aportantes, sus montos y el tipo de aportación, las declaraciones y firmas tendentes a autorizar al Instituto, para obtener, -de ser necesario- información.

c) Los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas señaladas en el Reglamento, así como las conciliaciones bancadas correspondientes al periodo en el que hayan durado las precampañas electorales.

d) Derogado.

e) El informe a que se refiere el artículo 143 del Reglamento.

f) Los controles de folios correspondientes a los recibos que se expidan en las precampañas electorales federales, de conformidad con las Disposiciones Transitorias del Reglamento, así como los registros centralizados de la militancia y de las aportaciones en dinero y en especie.

g) El Inventario de activo fijo por las adquisiciones o aportaciones de uso o goce temporal realizadas durante el periodo de precampaña.

h) Para los gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares, salas de cine e internet, se deberá observarlo dispuesto en los artículos 138, 208, 211, 214 y 215 del Reglamento por

cada uno de los candidatos internos, y las referencias a los candidatos se entenderán hechas a los candidatos internos.

i) La documentación comprobatoria de los ingresos que se reciban y los egresos que se realicen con motivo de las campañas internas.

j) Copia de la credencial para votar de los precandidatos, en medio magnético.

Artículo 242.

Plazos de presentación

1. Los informes de ingresos y gastos de precampaña deberán ser presentados a más tardar dentro de los diez días posteriores a la conclusión de las precampañas, de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley de Partidos.

2. Los aspirantes deberán entregar su informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, en términos de los dispuestos por el numeral 1 del artículo 378 de la Ley de Instituciones.

Lo anterior en razón que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que la difusión de propaganda que genere beneficio a un partido político, coalición o candidato debe considerarse como gasto de campaña y debe de ser fiscalizada.

En la Tesis LXIII/2015, con el rubro “Gastos de campaña. Elementos mínimos a considerar para su identificación”, el Tribunal señaló que a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad que a continuación se describen.

Finalidad: *Implica que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano.*

Este criterio se cumple en razón los eventos y las publicaciones se realizan en un contexto de promocionar y posicionar al denunciado, mediante actos en que se llevaron de manera masiva.

Temporalidad: *se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en periodo dentro de las precampañas o campañas electorales, así como la que se haga en el periodo de intercampaña siempre que tenga como finalidad difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él.*

Como observa esa autoridad los mensajes versan desde noviembre de 2021 al diciembre del mismo año ya iniciado el proceso electoral, como se puede apreciar de la certificación que solicito se realice de las ligas y publicaciones referidas.

Territorialidad: *Consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.*

Se acredita en razón que las actividades realizadas fueron realizadas todas dentro del Estado de Tamaulipas en distintos Municipios.

En este sentido, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial.

La Tesis en comento se transcribe para mejor apreciación:

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con **elementos** para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes **elementos mínimos**: a) finalidad, esto es, que genere un

beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.

En ese tenor se ha omitido informar a esa autoridad gastos por concepto de renta de espacios, renta del sistema de audio y escenarios, botargas, disfraces, altavoces, transporte, utilitarios, sillas, alimentos y bebidas que se utilizaron en los eventos denunciados; conductas que podría constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos.

Es de observar que de un análisis integral a las pruebas aportadas, se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar:

Modo.- *Se acredita que los eventos denunciados fueron realizados para posicionar al denunciado C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, apoyado por la organización Todos por Tamaulipas, en los cuales se utilizaran renta de espacios, renta del sistema de audio y escenarios, botargas, disfraces, altavoces, transporte, utilitarios, sillas, alimentos y bebida, renta de mobiliario, templates..*

Tiempo.- *Los eventos se realizaron previos al inicio de la precampañas y durante el proceso electoral ya iniciado. Los eventos los dieron a conocer diversos medios de comunicación, el propio denunciado y también se da cuenta en diversas publicaciones de redes sociales.*

Lugar.- *Los eventos son realizados en diversos municipios de Tamaulipas.*

Como se observa presenta una violación manifiesta, sistemática y violatoria a los principio (sic) de equidad e imparcialidad en materia electoral, violación flagrante a la Constitución como se indicó en párrafos anteriores.

Ahora bien, es menester señalar que los ahora denunciados tienen la obligación de registrar sus ingresos y gastos en tiempo real, por lo que la omisión de reportar lo que a letra se expresa en el presente ocurso debe de ser sancionado.

El artículo 38 del Reglamento de Fiscalización a la letra señala:

Artículo 38. Registro de las operaciones en tiempo real

- 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.*
- 2. Para efectos del inicio del plazo, se tendrá por válida la operación de ingreso o egreso a que se refiere el artículo 17, aquella que tenga la fecha de realización más antigua.*
- 3. Los sujetos obligados no podrán realizar modificaciones a la información registrada en el sistema de contabilidad después de los periodos de corte convencional.*
- 4. Los registros contables en el sistema de contabilidad tendrán efectos vinculantes respecto de sus obligaciones.*
- 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.*

En ese tenor ante la omisión de los denunciados para reportar los montos por concepto de los eventos realizados debe de ser considerada bajo el criterio y montos de la matriz de precios, con información homogénea y comparable, considerando el precio más alto de dicha matriz, tal como lo señala el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización:

Artículo 27.

Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados

- 1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente:*
 - a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.*

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.

d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

3. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto específico no reportado.

4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del apoyo ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.

CUARTO. FRAUDE A LA LEY Y SIMULACION PERFECTA PARA REALIZAR ACTOS DE CAMPAÑA ANTICIPADOS.

Aunado a lo anterior, es de suma importancia señalar que TODOS POR TAMAULIPAS, es un aviso comercial propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, vigente desde el 5 de julio del 2012 y curiosamente vigente hasta el día 5 de julio del 2022.

El nombre comercial utilizado por RICARDO GAVIÑO CARDENAS y CÉSAR VERÁSTEGUI, etc., ha sido el medio perfecto para promover candidatura de manera anticipada, para promoción personalizada, para evitar la fiscalización

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP

de recursos ilegales para cometer todo tipo de irregularidades en materia electoral y en materia financiera y para evitar sanciones y fiscalización.

En ese sentido resulta, que el aviso comercial, vigente con número, 74501 expediente 77309 ante el institutito (sic) mexicano de la propiedad industrial y que es un bien tangible propiedad del GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, no puede ser objeto de denuncia o de reclamación por algún ciudadano o partido político YA QUE EL UNICO LEGITIMADO PARA INICIAR EL TRAMITE DE DENUNCIA ADMIASTRATIVA O PENAL ES EL PROPIO GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, del que era SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, CÉSAR VERÁSTEGUI, y beneficiario de su utilización, esto de acuerdo a la ley de propiedad industrial y el código penal federal.

Por lo que se actualizada la perfecta trampa procesal, que es parte del fraude a la ley, y es la imposibilidad de poder denunciar hechos ilícitos por que el ofendido en este caso es el GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, jamás lo hará NI PRESENTARA DEUNCIA ALGUNA y el agravio y conclusión es que tienen el perfecto obstáculo legal para ser investigados o denunciados, a menos que esa comisión de fiscalización, haga la investigación solicitando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los registros números Exp. 77309 y registro 74501 del aviso comercial número marca nominativa, cuyo titular es el Gobierno del Estado de Tamaulipas y establezca la sanción más alta ante la actualización de una verdadera colusión de servidores públicos y particulares para violar de forma constante y permanente la ley electoral, a través de un aviso comercial cuyo nombre era conocido para el electorado tamaulipeco.

Más perfecto, el pacto de impunidad, entre todos los participantes no podía existir, pero como en toda simulación de mala fe, no existe la prueba perfecta, sino que son los indicios la probanza ideal, AQUÍ SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A LA REGLA ; EXISTEN SON PRUEBAS DIRECTAS Y SON DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE SURTEN EFECTOS CONTRA TERCEROS y lo son el registro del aviso comercial numero 74501 propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas vigente desde el día 5 de julio del 2012, hasta el día 4 de julio del 2022, una vez realizadas las elecciones, el medio ideal y el camino e instrumento perfecto hacia la comisión de todo tipo de irregularidades, que deben ser investigadas y sancionadas.

Solcito formalmente se solicite la información completa de todo el expediente administrativo formado con el aviso comercial TODOS POR TAMAULIPAS propiedad del gobierno de Tamaulipas REGISTRADO ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De lo anterior se solicita a esa autoridad fiscalizadora se inicie una investigación por el probable desvío de fondos públicos vía Todos por Tamaulipas, hacia eventos del C. CÉSAR VERÁSTEGUI, durante el año 2021, con la intención de posicionarlo ilegalmente violentando la ley y realizando actos anticipados de precampaña y de campaña. Y que los mismos sean sumados a los gastos de precampaña y de campaña del denunciado.

Por lo tanto, y en virtud de los motivos y fundamentos expuestos, se solicita a ese órgano, sancione a los responsables en lo que es materia de esta denuncia, y se sirva tomar las medidas que resulten conducentes para restablecer el orden jurídico vulnerado.

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

PRUEBAS:

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación que esa autoridad realice de las ligas señalada en el presente curso. Prueba con la que se demuestra la veracidad de los hechos narrados y los agravios invocados en el presente escrito de denuncia.

2.- LA TECNICA.- Consistente en los videos de los eventos multicitados que obran en las ligas señaladas y que solicito a esa autoridad certifique. Prueba con la que se demuestra la veracidad de los hechos narrados y los agravios invocados en el presente escrito de denuncia.

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Constituida por todas y cada una de las diligencias que se desahoguen dentro del expediente que se forme con motivo de la presente Denuncia, en todo lo que sea útil para la integración y sustento. Esta prueba guarda relación con todos los hechos manifestados en este escrito.

4.- LA PRESUNCIONAL EN DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Que hago consistir, respectivamente en las deducciones lógico jurídicas que se deriven de todo lo actuado, así como en las deducciones lógico jurídicas a las que arribe la autoridad jurisdiccional electoral con base en la lógica, la experiencia y la sana crítica, versando la prueba sobre todo lo actuado en el expediente, en todo lo que sea útil para sancionar a quien corresponde. Esta prueba guarda relación con todos los hechos manifestados en este escrito.

III. Acuerdo de recepción. El dos de marzo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja mencionado, integrar el expediente respectivo bajo el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP**; y notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto (Fojas 0058 a 0060 del expediente digital).

IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El dos de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/4206/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la recepción del escrito de queja (Fojas 0061 a 0062 del expediente digital).

V. Notificación de recepción al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El dos de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/4207/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización la recepción del escrito de queja (Fojas 0065 a 0066 del expediente digital).

VI. Remisión del escrito de queja al Instituto Electoral de Tamaulipas. El dos de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/4233/2022 la Unidad Técnica de Fiscalización, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, remitió copia del escrito de queja de mérito, al Instituto Electoral de Tamaulipas, a efecto de que se determinara lo que en derecho corresponda respecto a los hechos denunciados en contra del denunciado, el C. Cesar Augusto Verastegui Ostos, alias “El Truko” y/o “El Truco”, aspirante, precandidato y/o candidato al cargo de Gobernador del Estado de Tamaulipas, consistentes en posibles actos anticipados de precampaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como posible desvío de fondos públicos(Fojas 0070 a 0072 del expediente digital).

VII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el once de marzo de dos mil veintidós, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y la Doctora Carla Astrid Humphrey Jordan, el Consejero Electoral Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, así como el Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, Maestro Jaime Rivera Velázquez.

Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de cuenta, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente para emitir la presente Resolución.

2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 31, numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede realizar el análisis correspondiente para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada.

En ese sentido, cuando se analice un escrito de queja y/o denuncia por la presunta comisión de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.

No proceder en esta forma, se considera, atentaría contra la técnica que rige la materia procesal y se dejarían de observar las formalidades que rigen los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización.

Sirven como criterios orientadores a lo anterior, lo establecido en las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación, de rubros: **“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO”** e **“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO”**¹

Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación con el 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, cuya literalidad es del tenor siguiente:

“Artículo 30
Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(...)

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados. *En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto;*

(...)”

¹ Consultables en el Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo VII, mayo de 1991, p. 95 y Tomo IX, enero de 1999, Pág. 13, respectivamente.

**“Artículo 31.
Desechamiento**

1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desecharamiento correspondiente, atendiendo a los casos siguientes:

I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 del Reglamento.

(...)”

En este orden de ideas, de la normatividad señalada se desprende lo siguiente:

- Que la autoridad electoral fiscalizadora debe resultar competente para conocer de los hechos denunciados en el escrito de queja.
- Que, en caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que deseche de plano el procedimiento y deberá remitirlo a la autoridad u órgano que resulte competente.

Ahora bien, de la lectura al escrito de queja presentado por la C. María Luisa García Medina, por su propio derecho; se advierte la denuncia de hechos atribuidos al C. Cesar Augusto Verastegui Ostos, alias “El Truko” y/o “El Truco”, en su carácter de precandidato al cargo de Gobernador del Estado de Tamaulipas, en los que esencialmente se señaló lo siguiente:

- Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veintiuno, la Asociación y/o Agrupación Todos por Tamaulipas, promocionó la imagen del C. Cesar Augusto Verastegui Ostos, alias “El Truko” y/o “El Truco”, con la finalidad de posicionar su imagen en el electorado, generando un beneficio al denunciado.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP

- En el periodo indicado, el denunciado fungía como servidor público, en el cargo de Secretario de Gobierno del Estado de Tamaulipas.
- La realización de los eventos denunciados, constituyen **actos anticipados de precampaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como posible desvío de fondos públicos**, que, en consideración de la quejosa, también constituirían violaciones al Reglamento de Fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022 del estado de Tamaulipas.
- Todos los eventos denunciados, acontecieron durante el periodo de previo al inicio de las precampañas, pues las publicaciones abarcan del 17 de noviembre al 12 de diciembre del año dos mil veintiuno.

Cabe señalar que la quejosa, ofrece como pruebas diversos links con los que pretende probar que los hechos y/o eventos, fueron difundidos en la red social denominada Facebook, así como en medios de comunicación impresos y/o electrónicos, durante el periodo cuyas fechas de publicación comprenden los meses de noviembre y diciembre del año dos mil veintiuno, esto es, previo al inicio de las precampañas del Proceso Electoral Local 2021-2022, lo que, entre otras conductas, actualizarían **actos anticipados de precampaña**, que colocan al denunciado en condiciones ventajosas sobre todos los contrincantes en la contienda electoral, vulnerando el bien jurídico tutelado de equidad en la contienda electoral.

Al respecto, es menester precisar que en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, se aprobó el Acuerdo INE/CG1601/2021 mediante el cual se ejerce la facultad de atracción para determinar fechas únicas de conclusión del periodo de Precampañas y para recabar Apoyo de la Ciudadanía para las candidaturas independientes, durante los Procesos Electorales Locales 2021-2022 en los estados Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y **Tamaulipas**.

En esa tesitura, mediante Acuerdo INE/CG1746/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó los plazos para la fiscalización de los Informes de ingresos y gastos, correspondientes a la obtención del apoyo de la ciudadanía, **precampañas** y campañas de los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y **Tamaulipas**, donde se establecieron los siguientes periodos:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP

Periodo	Inicio	Fin
Precampaña	2 de enero de 2022	10 de febrero 2022

Es de destacar que el periodo de precampaña inició hasta el mes de enero de dos mil veintidós.

Expuesto lo anterior, y tomando en consideración las pretensiones de la quejosa, esta autoridad advierte la actualización del presupuesto jurídico previsto en el artículo 30, numeral 1, fracción VI² del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al advertirse, con base en las facultades legales atribuidas a la Unidad Técnica de Fiscalización, que la queja es notoriamente improcedente por resultar incompetente esta autoridad para conocer y pronunciarse respecto de los hechos denunciados.

En efecto, los hechos denunciados y atribuidos al C. Cesar Augusto Verastegui Ostos, alias “El Truko” y/o “El Truco”, descansan en la premisa de la existencia de posibles actos anticipados de precampaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como el probable desvío de fondos públicos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en Tamaulipas; respecto de los cuales, esta autoridad se encuentra limitada a pronunciarse, por lo que, resulta necesario primero, conocer, investigar y en su caso determinar la acreditación de dichas conductas, respecto de las cuales esta autoridad no es competente.

No es óbice a lo anterior, que los hechos que dan origen al procedimiento de mérito de acreditarse podrían ser causales de violaciones a la normatividad electoral, con incidencia en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 que transcurre en el estado de Tamaulipas.

Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 135, fracción XIII, 313, fracciones I, II, V y VI del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas³, en

² **Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización**
Artículo 30. Improcedencia.

1. El procedimiento será improcedente cuando:

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto.

³ “Artículo 135.- El Secretario Ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes:

(...)

XIII.- Substanciar las quejas y recursos que deban ser resueltos por el Consejo General, y preparar el proyecto correspondiente;”

“Artículo 313. Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes a precandidatos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;

II.- En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por este Código;

III.- Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;

relación con los artículos 6, 10 y 53 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Tamaulipas⁴, aplicable al caso concreto, es competencia de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local de referencia, tramitar y substanciar los procedimientos administrativos sancionadores que versen sobre los hechos denunciados relativos a actos anticipados de precampaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como el posible desvío de fondos públicos.

En las relatadas consideraciones, es importante señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado B, penúltimo y últimos párrafos que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; personas precandidatas, coaliciones; candidatos y candidatas a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional y organizaciones de observadores electorales a nivel federal.

IV.- No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en este Código;

V.- Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo General; y

VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código."

⁴ "Artículo 6. Son órganos competentes para la tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores:

I. El Consejo General;

II. La Comisión;

III. La Secretaría Ejecutiva; y

IV. La DEAJE.

Los Órganos Desconcentrados, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos sancionadores."

"Artículo 10. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante la Secretaría Ejecutiva; las personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho. Cuando el IETAM tenga conocimiento de la presunta comisión de conductas infractoras, iniciará el procedimiento sancionador respectivo. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Los partidos políticos, coaliciones deberán presentar las quejas o denuncias por escrito, a través de sus representantes debidamente acreditados, y las y los candidatos independientes, por sí mismos, o a través de sus representantes."

"Artículo 53. Durante los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva instruirá el procedimiento sancionador especial, cuando se denuncie la comisión de conductas que: I. Violan lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal; II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos o coaliciones en la Ley; o III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Cuando se denuncia el uso indebido de recursos públicos, se debe dar vista a la Fiscalía de Asuntos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado."

Posteriormente, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecieron las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites respecto de su competencia.

En virtud de lo anterior, resulta evidente que los hechos y las conductas que fueron denunciadas no versan ni guardan relación alguna con posibles infracciones sobre el origen, monto, destino y manejo de los recursos de los partidos políticos y demás sujetos obligados, que sí se encuentra dentro de la esfera competencial de la Unidad Técnica de Fiscalización, tal como se estipulan los artículos 190 a 200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales se colige que, una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, personas aspirantes a candidatos independientes, precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas, organizaciones de observadores y agrupaciones políticas, a través de su Consejo General que a su vez, –como ya se dijo- cuenta con una Comisión de Fiscalización, cuya encomienda es la supervisión, seguimiento, control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios de la fiscalización.

A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus actividades, conforme a los procesos fiscalizadores establecidos, para lo cual cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización, que como unidad especializada tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento y a su vez el carácter de autoridad sustanciadora para investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos, ya sea como parte de sus actividades ordinarias o derivado de un Proceso Electoral, tal como se lee del artículo 196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así las cosas, y toda vez que los hechos denunciados en el presente asunto son encaminados a investigar diversos hechos y/o eventos que, en consideración de la quejosa, constituyen actos anticipados de precampaña en detrimento de la equidad

en la contienda y que conforme a su dicho, sirvieron de promoción de imagen del denunciado, por el probable uso indebido de recursos de carácter dudoso y/o públicos, lo anterior, mientras el denunciado fungía como servidor público, con el cargo de Secretario de Gobierno del Estado de Tamaulipas, durante el periodo comprendido de octubre a diciembre de dos mil veintiuno, cuya investigación y pronunciamiento no son competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización; se requiere que la autoridad competente, se pronuncie sobre la naturaleza de los hechos denunciados, para que, en caso de resultar vinculante para la autoridad fiscalizadora, pueda actuar conforme a derecho.

Por tanto, este Consejo General considera que el fondo de las pretensiones manifestadas, se circunscriben a la denuncia de actos anticipados de precampaña, en virtud de que de la integridad de los hechos de ninguna manera refieren indagar un ilícito relativo al origen, monto, destino y/o aplicación de los recursos de los sujetos obligados, por lo que es dable concluir de manera contundente, la actualización de la causal prevista en la fracción I, numeral 1, del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En efecto, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas que le confiera la ley, éste será competente.

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser otorgada por un acto legislativo material o, en su caso, por medio de leyes secundarias, acuerdos o decretos a fin de que los órganos puedan cumplir las atribuciones que el Estado les tiene encomendadas.

Por lo que, en un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a los términos establecidos por la ley y el interés público.

En concordancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación al emitir la **Jurisprudencia 8/2016** de rubro: COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO, estableció que, si bien del artículo 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la **realización anticipada de actos de precampaña** y de campaña; solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas, así como el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la ley electoral; lo cierto es que, para determinar la competencia de conocimiento de queja alguna en dicha materia, por regla general, se deberá tomar en cuenta la vinculación al Proceso Electoral respectivo, por lo que corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral que organice los comicios que se aducen lesionados.

En ese sentido, a efecto de identificar si las presuntas publicaciones denunciadas representan un beneficio directo al denunciado, es preciso identificar primeramente a la autoridad competente para conocer de la queja sobre presuntos actos anticipados de precampaña; que, conforme a la Jurisprudencia citada, por regla general se toma en cuenta la vinculación al Proceso Electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad de la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral que organice los comicios que aduce, han sido lesionados.

De ahí que los hechos denunciados encuentran correspondencia con la competencia de la autoridad electoral local, ya que la denuncia presentada se encuentra vinculada con la presunta vulneración de su normatividad en esa materia, cuya vía de resolución se encuentra establecida en el artículo 440, fracción 1, incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber:

***“Artículo 440.** - Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:*

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales;

b) Sujetos y conductas sancionables;

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos;

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y

(...)”

(Énfasis añadido)

De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales en vías de conocer sobre un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, el artículo 194 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, establece que *los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en este Código, en sus Estatutos, convocatorias, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político.*

En efecto, dicha figura jurídica, pertenece al ámbito de competencia de la autoridad electoral local, según se desprende en los diversos 135 y 313 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, que establecen lo siguiente:

CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS

(...)

**LIBRO TERCERO
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS Y LA FUNCIÓN
ELECTORAL**

**TITULO SEGUNDO
DE LOS ORGANOS CENTRALES**

**CAPÍTULO II
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO**

(...)

Artículo 135.- *El Secretario Ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes:*

(...)

XIII.- *Substanciar las quejas y recursos que deban ser resueltos por el Consejo General, y preparar el proyecto correspondiente;*

(...)

**LIBRO QUINTO
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL**

**TITULO PRIMERO
DE LAS FALTAS ELECTORALES Y SU SANCIÓN**

**CAPÍTULO I
SUJETOS, CONDUCTAS SANCIONABLES Y SANCIONES**

(...)

Artículo 313. *Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes a precandidatos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:*

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;

II.- En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por este Código;

III.- Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;

IV.- No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en este Código;

V.- Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo General; y

VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

(...)

De las referidas disposiciones se advierte que, el Consejo General del Estado de Tamaulipas, a través de su Secretario Ejecutivo, substanciará las quejas y recursos que deban ser resueltos por el Consejo General, derivados de la denuncia de hechos relacionados con **actos anticipados de precampaña, el uso de recursos recibidos en dinero o en especie destinados a la precampaña por parte de personas no autorizadas** y, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código Electoral Local, y preparar el Proyecto de Resolución que conforme a derecho corresponda.

En razón de lo anterior, y conforme a la normatividad invocada, se considera que, el órgano electoral competente para conocer la queja presentada, es precisamente el Instituto Electoral de Tamaulipas, el cual tiene a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en esa entidad federativa; toda vez que hechos en el consignados podrían ubicarse en los supuestos aludidos en el párrafo que antecede, por lo que resulta indispensable que las conductas atinentes sean investigadas por aquella autoridad electoral local, y en su caso, emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.

Finalmente, no escapa a esta autoridad que, adicional a lo previamente expuesto, la presunta ejecución de los hechos controvertidos aconteció en temporalidad previa a la precampaña del cargo público materia de la eventual contienda en Tamaulipas.

De tal suerte que, dada la temporalidad, ubicación y naturaleza intrínseca de los hechos materia de la denuncia, se colige que la actuación de la autoridad fiscalizadora se encuentra *sub judice* a la determinación de ese Instituto Local en razón de que la pretensión que subyace recae sobre la premisa consistente en la presunta actualización de actos anticipados de precampaña cuya competencia, como se ha dicho, corresponde a la autoridad electoral local.

De este modo, y considerando que la presunta infracción que podría configurarse es la de actos anticipados de precampaña, conforme a lo expuesto, corresponde primeramente conocer y estudiar los hechos denunciados al Instituto Electoral de Tamaulipas, de tal suerte que, la calificación respecto a su existencia, que al efecto determine, resultará vinculante para esta autoridad, a fin de proceder, o no, a cuantificar las erogaciones o aportaciones que en su caso hayan acontecido, a los montos correspondientes a la etapa electoral de precampaña del sujeto obligado denunciado, en su caso.

En consecuencia, este Consejo General concluye lo procedentes es **desechar** el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al carecer de facultades para conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

3. Remisión del escrito de queja al Instituto Electoral de Tamaulipas. Tal y como fue expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se hicieron del conocimiento de la autoridad electoral local los hechos denunciados en términos de la pretensión del denunciante.

En tal virtud, el dos de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/4233/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista al Instituto Electoral de Tamaulipas, con el escrito de queja que originó el presente procedimiento para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, determine

lo que en derecho corresponda, **lo anterior a fin de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia.**

De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad electoral local en su caso podría resultar vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización tiene esta autoridad nacional; se consideró procedente requerir al **Instituto Electoral de Tamaulipas**, para que en su caso informe la determinación recaída a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer sobre la calificación de los hechos denunciados y de ser el caso, proceder conforme a derecho corresponda.

En tal sentido se considera necesario, hacer del conocimiento del Organismo Publico Local, la determinación de esta autoridad electoral.

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidas; en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa); y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **desecha de plano** la queja interpuesta por la C. María Luisa García Medina, por derecho propio, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la quejosa la C. María Luisa García Medina, en el domicilio señalada para oír y recibir notificaciones la presente Resolución.

TERCERO. En términos del **Considerando 3** hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Tamaulipas, la determinación de esta autoridad.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/17/2022/TAMP

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 18 de marzo de 2022, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**